

D

D

Vivek
Chibber

El ABC del
capitalismo

El capitalismo y el estado

B. El capitalismo y el estado

Vivek
Chibber

El capitalismo es un sistema basado en una desigualdad económica básica, una pequeña proporción de la población controla los medios de producción mientras que la demás población se ve obligada a trabajar para ellos. Tal desigualdad de riqueza genera a su vez desigualdades masivas de ingresos, al controlar los medios de producción, los empleadores exigen quedarse con el grueso del ingreso producido por sus empresas. Los capitalistas utilizan sus derechos de propiedad para apropiarse de la mayoría del ingreso creado por sus negocios. Es una forma de extorsión sistemática. Esencialmente, los capitalistas les dicen a sus trabajadores, “si quieren que los empleemos, tendrán que aceptar nuestras condiciones. Si no les parece, vean cómo les va sin empleo.”

Por su parte, los trabajadores terminan aceptando el trato porque un empleo malo es mejor que ningún empleo. Pero aceptan mucho más que eso. Además, aceptan que mientras estén trabajando, le entregarán gran parte de su libertad individual al patrón — libertad a decidir a qué ritmo trabajarán, cuándo comerán, cuánto se pueden desplazar, a quién le pueden hablar, qué ropa se pueden poner, etc. El poder para establecer las condiciones de empleo le da al capitalista un enorme grado de control sobre el bienestar básico de los trabajadores. Sus

inversiones determinan cuántos puestos de trabajo se crearán, luego ellos deciden a quién le tocará los empleos y a quién no, ellos fijan el ritmo de trabajo, ellos controlan quién es ascendido y quién no, etc.... y siempre son los trabajadores los que deben adaptarse. Como se ven obligados a constantemente ajustar sus prioridades a las decisiones hechas por sus patrones, las vidas de los trabajadores suelen girar en torno a una cuestión principal, el empleo. Todo lo anterior es otra forma de plantear que en nuestro sistema económico los capitalistas son los que fijan las condiciones que rigen las vidas de todos los demás.

El movimiento obrero moderno ha usado todo medio a su alcance para reducir el poder desenfrenado de los empleadores y también buscar formas de contrarrestarlo. Un de estos medios ha sido el estado democrático. Después de todo, se supone que el estado es el guardián del interés general. Por lo que, si bien los capitalistas controlan la economía, tal vez los gobiernos pueden nivelar la balanza poniéndose al lado de los trabajadores: pasando leyes que limitan el abuso de los empleadores, cobrando impuestos y gastando de tal manera que mejore la posición negociadora de los trabajadores. Por esta misma expectativa lucharon los movimientos obreros por doquier para que los pobres tuvieron el derecho a voto. Y por la misma razón los capitalistas y los pudientes más generalmente lucharon en contra: ambas partes esperaban que si ganaban el voto, los trabajadores usarían su ventaja numérica para elegir a políticos que desplumarían a los ricos.

De cierto modo, se han realizado las esperanzas de los trabajadores. La democracia les ha traído grandes ventajas a los pobres. Los estados democráticos sí protegen los intereses de los trabajadores más que las oligarquías y las dictaduras. Y

sin embargo, sigue siendo cierto que los pobres no tienen verdadero poder político. Aun cuando un Rockefeller tiene el mismo número de votos que alguien que trabaja para él, y a pesar de que sus trabajadores tienen la ventaja numérica, de alguna manera su influencia política es infinitamente superior a la de sus trabajadores. A pesar de que la democracia ha domesticado el sesgo de clase del estado, la orientación básica de la política estatal favorece decididamente a los ricos. Fundamentalmente sigue siendo *su* estado. En ninguna parte del mundo industrial avanzado es más evidente que en los Estados Unidos y nunca ha sido más claro que durante la última generación. Estamos viviendo en una nueva Edad Dorada en la que una increíble concentración de la riqueza ha aumentado a la par de la concentración del poder político.

Este folleto analiza las fuentes de sesgo del estado. Tenemos que entender por qué, lejos de contrarrestar el poder del capital, los estados tienden a reforzarlo. Tenemos que reconocer las fuerzas estructurales que se unen a intereses capitalistas, aun cuando la minoría numérica de los capitalistas debería ser una desventaja en un sistema democrático.

¿Un estado neutro?

Hay una intuición básica y potente que subyace a la idea de que en una democracia capitalista, aun si la economía está bajo control capitalista, el estado no tiene por qué estarlo. La política pública es creada por partidos y políticos y los políticos son elegidos por el número de votos que logran obtener. Y el voto de la persona más rica no vale más que el voto de los más pobres. Aun mejor, los pobres superan enormemente a los ricos. Esto no sólo nivela el terreno de juego entre ricos y pobres, podría

incluso inclinarlo a favor de los pobres, ya que, en una democracia, los números son los que importan. Sería insensato que un político racional consienta a los capitalistas ya que sólo alcanzan unas decenas de miles de votos, mientras que hay millones de trabajadores. Así que si un partido realmente quiere llegar a ser una fuerza política, lo más sensato es hacerle caso a los grupos de interés más grande, es decir no a los capitalistas.

La teoría política que mejor representa este punto de vista es el *pluralismo*. El pluralismo sostiene que en una democracia la competencia por votos neutraliza el poder de cualquier grupo particular de la sociedad. Si asumimos que los políticos están básicamente interesados en ganar elecciones, ciertamente un supuesto razonable, entonces se inclinarán hacia cualquier grupo que ofrezca el mayor número de votos. Así que si los trabajadores logran cohesionar sus votos en un solo bloque pueden ejercer una influencia decisiva sobre la política. Pero no sólo los trabajadores. Cualquier grupo de interés puede ejercer poder, siempre que logre actuar en conjunto y demostrar que puede cumplir con la promesa de votos: los grupos religiosos, las minorías étnicas, los ancianos, las mujeres, los estudiantes, etc. Todos podrían ser grupos de interés, y los partidos agruparían al público votante en la colección de grupos de interés necesaria para llegar al poder.

El pluralismo es y ha sido la teoría del estado más influyente por mucho tiempo. Observemos que gira en torno a dos premisas fundamentales: primero, que ningún grupo es más importante que otro en el juego de la influencia, y segundo que el estado es neutral *ex ante*. Ya hemos introducido la primera de estas premisas, cuando planteamos que cualquier grupo de interés puede ganar en el juego de influencia, equivale a decir

que ningún grupo tiene necesariamente una ventaja sobre cualquier otro. Quien gane depende de las habilidades de los representantes de los grupos al presentar sus argumentos, al integrar a otros a una fuerza viable electoral o de cabildeo, al articular una coalición con otros grupos, etc. Y por supuesto al tratar de convencer al público más amplio. Todos estos factores determinan qué grupo de interés logra ejercer influencia. Y las habilidades que esto conlleva están generalmente a disposición de todos. Por lo tanto, ningún grupo de interés particular tiene la ventaja sobre cualquier otro.

La segunda premisa también queda implícita en la historia que acabamos de contar. Si es cierto que cualquier grupo de interés puede llegar a ganar el juego de influencia, ello implica que el estado también tiene toda la disposición de dejarse influenciar por cualquier persona. Gerentes estatales – presidentes, legisladores y burócratas de alto nivel – son receptivos a cualquier sugerencia. Le prestan atención a todo actor que sea persuasivo y, más importante aún, que parezca ejercer verdadera influencia. Tal comportamiento es racional porque, una vez más, la política se reduce en última instancia a los números. Si un grupo de interés es capaz de realmente movilizar sus miembros y su base, si es capaz de armar una coalición electoral eficaz, entonces cualquier político razonable prestará atención, independientemente de la naturaleza del grupo de interés. Por supuesto, una vez que ejerza su influencia, una vez que logre que le preste atención, el estado promulgará legislación a su favor. En este sentido, no será neutral *ex post*. El punto es que, al ser receptivo a todo grupo, dispuesto a ser presionado o influenciado, el estado en principio es neutral, no exhibe *sus propios sesgos* a favor o en contra cualquier sector de la población. No

favorece a ninguno de ellos. Es en este sentido que pluralistas describen al estado como neutro.

Un estado parcial

Esta descripción de la política es muy reconfortante, pero parece que al público americano nunca le llegó el memorándum. Si de algo sirve la experiencia, los ciudadanos común y corrientes han quedado convencidos de que el juego está amañado. En lugar de apreciar que el estado a grandes rasgos responde a la gente común, lo ve como un ente distante en el que no se puede confiar. La confianza pública en el gobierno está en su nivel más bajo, en el 2017 sólo el 20% de encuestados indicó que se podía confiar en el gobierno para promover sus intereses.⁰¹ Y no es sólo un bache, el indicador ha sobrepasado el 50% sólo una vez desde 1972, y fue justo después de los ataques del 11-S. Durante casi dos generaciones, la mayoría del público estadounidense ha sentido que no se puede confiar su gobierno.

Y la razón es sencilla. En la encuesta más reciente, el 82% de los estadounidenses opina que el gobierno está básicamente controlado por los ricos, mientras que 76% opina que los pobres ejercen poca influencia.⁰² [Footnotes appear to be off.] Se trata de la última versión del mismo cuento. Durante casi 50 años, a la mayoría de los estadounidenses le ha parecido que no se puede confiar en el gobierno porque está en las garras de los “grandes” intereses especiales – es decir, de los ricos y las corporaciones – mientras que los votantes comunes y corrientes tienen poca o ninguna influencia. Ninguno de estos hechos son un buen augurio para la interpretación pluralista de la democracia capitalista.

01. Pew Research Center, “Public trust in government remains at historic lows as partisan attitudes shift”, May 2017.

02. AP-NORC Poll, June 2017

Por supuesto, las percepciones pueden equivocarse. Puede ser que la gente simplemente esté frustrada e inventando cuentos para consolarse, teorías de conspiración sobre la captura del estado, cuentos de moralidad sobre el “de abajo” que siempre sale perjudicado, etc. Pero resulta que las percepciones son respaldadas por investigaciones académicas. En una serie de estudios de referencia, científicos políticos estadounidenses están validando lo que la mayoría de los trabajadores siempre han sabido, que en realidad la política de estado tiene un sesgo muy fuerte a favor de los ricos. Una forma de medir la influencia que tienen diferentes clases de personas sobre el estado es preguntarle a la gente qué tipo de política prefiere, y luego evaluar si las políticas promulgadas coinciden con las preferencias expresadas. Los resultados son aleccionadores. Ambos partidos políticos exhiben una marcada tendencia a favorecer las políticas preferidas por los ricos sobre aquellas de los pobres. Pero más importante aún, cuando los pobres no tienen preferencias políticas que chocan con aquellas de los ricos, las posibilidades de que esas políticas se adopten — las políticas públicas de los pobres — bajan a casi cero. Es decir que sin importar quién gobierna, los pobres sólo ejercen influencia sobre el proceso político cuando los ricos coinciden con sus preferencias. Pero cuando sus reclamos van en contra los reclamos de los ricos, los pobres pierden absolutamente todo impacto político.⁰³

Tales resultados han sido un llamado de atención a los académicos convencionales, que se han obstinado en defender la perspectiva pluralista durante mucho tiempo. Pero para la

03. Aquí la obra clave es Martin Gilens, *Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America*, (New Jersey: Princeton University Press, 2014). Una buena

introducción no-técnica es Benjamim Page and Martin Gilens, *Democracy in America: What has Gone Wrong and what we can do to fix it*, (Oxford: Oxford University Press, 2018).

mayoría del público, especialmente las familias trabajadoras, no es ninguna noticia, como lo han demostrado las encuestas durante décadas. Para los progresistas, es en realidad un sentido común, ya que el sesgo de clase del estado se hace más evidente cuando los activistas tratan de cambiar políticas a favor de los trabajadores. Experimentan el sesgo de clase del estado por medio la resistencia a sus demandas y la respuesta a menudo hostil y punitiva. Ha sido así durante más de doscientos años, y sigue siendo así hoy en día. El desafío es primero entender cuáles son las fuentes de sesgo del estado, para entonces diseñar una estrategia para superar o neutralizarlas. Es justamente lo que este panfleto pretende hacer.

El capitalismo socava la democracia

La premisa subyacente de la visión pluralista es que democracia neutraliza las diferencias de poder creadas por el capitalismo. Lamentablemente, es erróneo. La esencia del problema en las sociedades modernas es que el capitalismo abruma la democracia, asegurando que el estado tenga un sesgo fundamental a favor de los intereses capitalistas. Existen tres cauces básicos mediante los cuales esto sucede:

1. Los ricos tienen mayores probabilidades de *ocupar* puestos políticos.
2. Los ricos ejercen mayor influencia *sobre* la gente en puestos políticos.
3. Lo más importante, la dependencia del estado frente al capital asegura que los políticos favorecerán a los capitalistas *aun si fallan los primeros dos mecanismos*.

Estos tres cauces casi siempre funcionan en conjunto. En algunos países, durante algunos períodos, los movimientos obreros han encontrado una manera de neutralizar el primero o el segundo. Pero neutralizar el tercero no es posible mientras rijan el capitalismo, es la restricción a prueba de fallos y además la más profunda de las tres. Por ende, es la más importante. Pero antes de abordarla, examinemos las primeras dos.

A. El personal

La promesa de la democracia es que cualquiera puede postularse a un cargo, y que siempre que puedan movilizar a sus votantes, cualquiera puede ganar. Pero la realidad es que los ganadores suelen venir de un grupo de interés en particular, los ricos. Esto es así para todos los niveles de gobierno. Un estudio de las administraciones presidenciales señala que *dos tercios* de los miembros de *todos los gabinetes* en el siglo XX eran gerentes corporativos, banqueros de inversión o abogados corporativos.⁰⁴ Esto significa que todos los gabinetes de la historia estadounidense reciente fueron básicamente dirigidos por capitalistas o sus más altos secuaces. Si nos dirigimos al Congreso, las cosas apenas mejoran. La inmensa mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado en los Estados Unidos son ellos mismos de los sectores más ricos de la sociedad. En 2014, la mayoría de los elegidos para la Cámara eran millonarios, y su patrimonio neto medio era poco menos de 1 millón dólares; el patrimonio neto medio de los miembros del Senado es de 2,7 millones.⁰⁵ Aun cuando los altos funcionarios públicos no provienen de la clase capitalista, típicamente

04. Dennis Gilbert, *La estructura de la clase americana en una época de creciente desigualdad*, Sage Press, 2015, novena edición, p. 183.

05. *Ibíd.* 184.

proviene de los entornos sociales e institucionales que rodean esta clase: bufetes de abogados de alto nivel, escuelas de élite, institutos de investigación prestigiosos, etc. Se trata de gente cuyas vidas enteras han estado al servicio del capital, aun cuando ellos mismos no son dueños de mucho capital.

¿Por qué nos importa? La razón más obvia es que el origen social de la gente impacta enormemente en cómo ven las cosas. El Cuadro 1 resume las diferentes opiniones de la gente muy rica y la gente común y corriente sobre una serie de políticas públicas. Observemos que las opiniones de los ricos son sistemáticamente más conservadoras en todo. Ahora, si sus ideas del bien y del mal en estos asuntos tienen tal sesgo, entonces si los funcionarios electos son seleccionados de este grupo, la agenda política de esos funcionarios igualmente se inclinará en esta dirección. Esto dará lugar a políticas públicas a favor de los ricos. Hay además una manera menos obvia en que importa su origen de clase. Las decisiones de los políticos no dependen sólo de *dónde vienen*, sino también de a *dónde quieren llegar*. Una proporción sustancial de legisladores utilizan el tiempo en su cargo para poder entrar a la comunidad empresarial una vez que dejen la política. Trabajan como consultores, *lobbyistas* o intermediarios, o empiezan sus propias empresas. Los contactos y el conocimiento privilegiado que acumulan mientras están en el cargo son de gran valor para las empresas que buscan obtener acceso a los encargados de formular políticas. Por ende, una breve temporada en el Congreso o en el Parlamento puede rendir enormes dividendos en el futuro. Este cauce que conecta carreras públicas a trabajo de *lobby* es tan lucrativo, que hasta le han puesto un nombre, la “puerta giratoria”. ¿Y por qué importa? Si un legislador pretende integrarse a la comunidad empresarial

Cuadro No. 1 – Preferencias de políticas públicas de multimillonarios vs ciudadanos medios

Empleos e ingresos

El gobierno debe garantizar comida, ropa y vivienda

El salario mínimo debe estar por encima de la línea de pobreza

Debe proveer un nivel de vida decente a los desempleados

Decent standard of living should be provided for the unemployed

Atención de salud

Un seguro médico financiado por impuestos

Pensiones y jubilación

Expandir 'Social Security'

Educación

Gastar lo necesario en escuelas públicas de alta calidad

El gobierno debe asegurar que todos puedan asistir a la

Universidad

Impuestos

El gobierno debe reducir diferencias entre altos y bajos ingresos

Debe reducir la desigualdad cobrándole altos impuestos a

los ricos

Porcentaje a favor

Todos los ciudadanos	Multi-Millionarios	Diferencia
68	43	-25
78	40	-38
53	8	-45
50	23	-27

61	32	-29
----	----	-----

55	3	-52
----	---	-----

87	35	-52
78	28	-50

46	17	-29
52	17	-35

después de su carrera política, se empeñará en dedicarse a establecer contactos con potenciales empleadores futuros o contactos comerciales, y en demostrarles que es confiable, que pueden contar con él para hacer lo correcto. Esto sólo refuerza el sesgo en sus preferencias políticas por los intereses capitalistas.

B. El juego de la influencia

Los pluralistas reconocerán que el gobierno está lleno de gente adinerada. No hay como negarlo. Pero argumentarían que los instrumentos de la democracia moderna sirven para contrarrestar el sesgo individual. Sean cuales fuesen las inclinaciones de un político, si ignora las opiniones de sus electores, si pisotea sus deseos, perderá credibilidad y, al final, perderá el poder. Es por esta razón que el quid de la cuestión, para los pluralistas, no son los antecedentes personales de los legisladores, sino

Cuando los pobres no tienen preferencias políticas que chocan con aquellas de los ricos, las posibilidades de que esas políticas se adopten — las políticas públicas de los pobres — bajan a casi cero.

el peso de la opinión pública, que se expresa en bloques de votantes para las elecciones, o la presión de grupos de interés organizados en el proceso político. Mientras las partes interesadas puedan reunirse y ejercer influencia sobre el estado, los administradores del estado tienen que prestarles atención, so pena de ser expulsados de sus cargos.

Por ahora, supongamos que los políticos realmente tienen buenas razones para acatar a la opinión pública y a los grupos de presión. Debe quedar claro que este hecho en si no basta para confirmar el optimismo de los pluralistas. La disposición de los políticos a ser receptivos sólo generará resultados democráticos si los pobres son, de hecho, capaces de obtener *acceso* a los responsables de la formulación de políticas. Para que los pobres tengan las mismas posibilidades que los ricos de que sus intereses sean representados, tendrían que tener el mismo éxito en la formación y el uso de grupos de presión que los ricos. Pero si el proceso de influencia entero está dominado por los ricos, si son ellos los que son escuchados por los administradores del estado, entonces, en lugar de que proceso de *lobby* sirva para contrarrestar los sesgos personales de los políticos, en los hechos *reforzará* esos sesgos. El éxito del *lobby* será una capa más *superpuesta* sobre los existentes sesgos personales de los gerentes del estado, haciendo que el estado se incline más firmemente a favor del capital.

Da la casualidad de que hay muy buena evidencia sobre quién gana el juego de influencia, y los resultados se inclinan *abrumadoramente* a favor del capital. Consideremos primero al *lobby*, que es el medio más común que tienen los intereses organizados para ejercer presión sobre el estado. En los Estados Unidos, una gran cantidad de tráfico de influencias se lleva a

cabo a través de asociaciones legales ubicadas en Washington DC, que representan los grupos de interés descritos por los pluralistas. Estas asociaciones se dedican a contactar a los legisladores, escribir informes normativos sobre políticas, hacer llamadas telefónicas, reunirse con los responsables de la formulación de políticas y tratar de convencerlos de las posturas de sus clientes, etc. En la jerga común se les dice *lobbyistas*. Estas son las organizaciones que supuestamente tienen acceso a los políticos para mantenerlos a raya. Pero en realidad, las organizaciones que representan los intereses empresariales superan con creces a las que representan a los trabajadores.

En el 2011, existían alrededor de 11.000 organizaciones de *lobby* registradas en Washington DC. Un estudio importante del proceso de *lobby* encontró que, de estas organizaciones *lobbyistas*, alrededor del 53% se dedicaban exclusivamente a representar los intereses empresariales, y *menos del 1%* representaba a los sindicatos. Grupos de *lobbyistas* empresariales superan a los grupos pro-trabajadores por más de 50 a 1. Si consideramos a las organizaciones que representan a los beneficiarios de los programas de asistencia social condicional— como Medicaid o cupones de alimentos — *no existía una sola organización registrada* en Washington dedicada exclusivamente a avanzar sus intereses. Si nos fijamos en los gastos, es aún más disparaje. En el 2017 la cantidad total de dinero oficialmente gastada por las organizaciones de cabildeo registradas en Washington DC fue de \$3,36 mil millones; los empresarios gastaron cerca de \$2,6 mil millones del total, mientras que los grupos pro-trabajadores gastaron 46 millones. Es decir que la proporción de gastos entre los empresarios y los trabajadores era de 56 a 1.⁰⁶

El *lobby* representa solo una forma de ejercer influencia y de ningún modo es la más importante. Igual de importante es el papel que juega el dinero en las elecciones. Dirigir una campaña electoral, independientemente de dónde y cuándo, requiere una gran cantidad de dinero. En los Estados Unidos, requiere una cantidad *enorme*. En el ciclo electoral del 2016, se gastaron un total de casi \$6,5 mil millones en las elecciones presidenciales y del congreso, un poco más de \$4 mil millones en estas últimas y poco menos de \$2,4 mil millones en la contienda presidencial. Las campañas presidenciales actualmente requieren cofres de guerra acercándose a los mil millones de dólares.⁰⁷ En 2016, los ganadores de las contiendas en la cámara baja gastaron un promedio de 1,5 millones dólares en sus campañas, mientras que el precio por ganar un escaño en el Senado ascendió a \$12 millones.⁰⁸

Todo este dinero tiene que salir de alguna parte. A los políticos les gusta presumir que las contribuciones que reciben son pequeñas, lo que implicaría que son impulsados por el apoyo de las familias de clase trabajadora o clase media. Pero este es un engaño. La *cantidad* de donantes por supuesto tiende a sobrerrepresentar a las pequeñas contribuciones, ya que la mayoría de las personas no es lo suficientemente rica como para donar grandes sumas. Pero si pasamos del número total de donantes al peso relativo de sus contribuciones, obtenemos una imagen distinta. El hecho es que un número muy reducido de donantes representa el grueso de los fondos que fluyen a

06. El total de los gastos por cabildeo fue obtenido en <https://www.opensecrets.org/lobby/>; el total de los gastos empresariales fue tabulados de https://www.opensecrets.org/lobby/list_indus.php (todos los sectores, excepto el “ideológico”, el “trabajo” y el “otro”); el total pro-trabajador proviene de la misma fuente.

07. <https://www.opensecrets.org/overview/cost.php>

08. <https://www.opensecrets.org/overview/election-trends.php?cycle=2016>

las campañas. En el ciclo de las elecciones de 2016, *la mitad del uno por ciento* (0,52%) de la población de Estados Unidos donó más de *dos tercios* (67,8%) de todas las contribuciones a las campañas políticas. Un equipo de investigadores del New York Times proveyó uno de los descubrimientos más sorprendentes. Encontraron que tan sólo 158 familias juntaron la mitad de todo el dinero recaudado por los dos partidos en las primeras etapas del ciclo electoral del 2016, alrededor de 176 millones de dólares entre ambos.⁰⁹ O sea que a pesar de que los pequeños donantes fueron más numerosos, no importaron mucho en cuanto a su peso económico. Fueron los donantes grandes que realmente se impusieron. El flujo de dinero a las campañas fue y continúa siendo, controlado por la clase capitalista, aquellos que en términos económicos se encuentran en el 1% de la población.

El hecho de que el dinero importe tanto significa que aquellos con *la mayor* cantidad de dinero tienen más *influencia*. Los que aspiran a candidaturas saben que tienen que juntar una cantidad enorme de dinero. Cualquier candidato racional entiende además que lo más razonable es abordar a los que son capaces de donar más dinero, con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo. Vale más obtener mil dólares de un tiro, frente a recibir diez dólares de cien donantes distintos. Pero esto crea un desafío muy concreto para los candidatos. Tienen que ser el tipo de candidato que los capitalistas *querrían* apoyar. Si no lo son, el dinero fluye a otra persona, alguien que los capitalistas estiman que promoverá mejor sus intereses.

09. Nicholas Cofessore, Sarah Cohen and Karen Yourish, "The families funding the 2016 Presidential election", New York Times, October 10, 2015. <https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/11/us/politics/2016-presidential-election-super-pac-donors.html>, visitada el 20 de diciembre del 2017.

Por lo tanto, los candidatos crean un perfil personal y una plataforma política que, al menos, no enajenará a poderosos patrocinadores, para así tener como mínimo la oportunidad de recaudar el dinero necesario para ser viable. Tienen que asegurar que sus prioridades sean aceptables para los súper ricos; tienen que prometen ponerse a disposición de estas mismas personas en caso de que pidan una audiencia; y tienen que elaborar una agenda política que quepa dentro de los límites de lo que aquellos adinerados consideren aceptable. No tienen que intercambiar favores especiales por el dinero expresamente, el proceso no tiene por qué ser tan corrupto. Sólo tienen que prometer que van a ser el tipo de candidato en el cual los donantes ricos puedan *confiar*.

Esto significa que en un sistema electoral impulsado por el dinero, hay de hecho dos carreras en cualquier ciclo electoral, una detrás de la escena y la otra al aire libre. Detrás escena, los candidatos compiten primero por los donantes; y luego, más adelante, se realiza la elección que todos vemos al aire libre, la competencia por los votos. El punto clave es que la batalla para atraer a donantes decide cuales de los candidatos pasarán a la segunda ronda, la batalla por los votos. Los candidatos que no pueden conseguir donantes son descartados antes incluso de que los votantes tengan la oportunidad de opinar, o son marginados de tal forma que en realidad tienen muy pocas posibilidades de ganar. No tienen el dinero para contratar personal, no pueden comprar 'spots' en la tele o la radio, no pueden ejecutar una campaña con eficacia, etc. Abandonan la carrera voluntariamente o se ven forzados a hacerlo. Por lo tanto la carrera por el dinero decide quién va a competir en la carrera por los votos.

Esto cambia totalmente el papel que juega la opinión pública en las elecciones. Recordemos que las dos opciones que supuestamente tiene el público para disciplinar a los administradores del estado son los grupos de presión organizados y las urnas. En narrativa convencional, un político racional alineará su política con las preferencias del público, ya que la opinión pública determina quién gana las elecciones. Según esa visión, las prioridades de los políticos tendrán que alinearse con las prioridades del público en general. Pero esto pasa por alto el impacto de la competencia por los donantes. La pugna por financiar las campañas obliga a los candidatos a poner las opiniones de los adinerados por encima de las prioridades del público en general. Se ven obligados a alinear su agenda política a la agenda de los donantes, porque si no lo hacen, efectivamente se auto-eliminan de la carrera electoral.

Como resultado, la opinión de la élite y la opinión general pública juegan papeles diferentes en el proceso político. La opinión de la élite es lo que siguen y priorizan los candidatos, mientras que la opinión general pública es algo que buscan manejar. En otras palabras, la opinión de la elite *impulsa* las prioridades de los candidatos, mientras que la opinión de masas desempeña un papel más pasivo, como una limitación que intentan negociar. Ahora bien, manejar la opinión pública no es lo mismo que ignorarla. Involucra una doble estrategia, dependiendo de cómo se alinea con los intereses capitalistas. En primer lugar, cuando no choca con lo que quieren los capitalistas, los políticos con gusto la toman en serio, e incluso la complacen. El mejor ejemplo son los temas no económicos, como conflictos religiosos o cuestiones sociales como la identidad sexual. Estos a menudo pasan a primer plano ya que sea como sea que se

resuelven, realmente no tocan los intereses económicos de los donantes. De hecho, son muy útiles como pararrayos políticos ya que al permitir que ocupen el primer lugar de la agenda, las políticas relacionadas a los intereses de la clase pueden decidirse tras bambalinas, en las negociaciones entre el capital y los administradores del estado.

En segundo lugar, en los casos en que la opinión pública sí choca con los intereses de los donantes, hay que neutralizarla de algún modo. La forma más típica es o *desviar* las demandas públicas hacia políticas menos amenazantes para los intereses de la élite, o apelar al “pragmatismo” de las aspiraciones populares. El mejor ejemplo de esto es la forma en que los partidos en los Estados Unidos han manejado las demandas públicas por un programa de salud nacional. Durante décadas, la opinión popular ha clamado por algún tipo de programa nacional de salud pública. Al no poder ignorarla, ambos partidos han tratado de neutralizarla. Los Clinton desviaron esas demandas en el 1992, de modo que lo que el público consiguió no fue un programa de salud nacional como en Europa, sino un sistema monstruoso, con burocracias aplastantes, llamado “salud manejada”-que, bajo bandera de la “política nacional”, le entregó la atención de salud a la industria de seguros y a los hospitales privados.

Veinticuatro años más tarde, cuando Bernie Sanders levantó la bandera de un sistema de ‘pagador único’ al estilo canadiense, fue una vez más uno de los Clinton que llegó al rescate del status quo. Incapaz de meter gato por liebre como lo había hecho en 1992 con Bill, ella recurrió a desinflar las expectativas públicas. Hilary era la candidata de “baja tus expectativas”. En vez de seguir la posta de la opinión pública, su estrategia fue desinflarla declarando que no era realista. La lección aquí es

que, como la preferida de la comunidad empresaria, el mandato de Clinton no procedía de su público votante, sino de sus donantes. Y su reacción ante una demanda que iba en contra de los intereses de los donantes fue hacer todo lo posible por neutralizar el poder de la opinión pública.

Resumiendo, cuando combinamos ambas dimensiones del juego de influencia — el juego del *lobby* y el proceso electoral — lo que emerge claramente es que se inclina abrumadoramente a favor del capital. La implicación es que la perspectiva pluralista convencional de una democracia capitalista tiene defectos fatales, incluso en sus propias premisas. El pluralismo sostiene que el estado y sus administradores no son parciales a favor de ningún sector en sí de la sociedad, y que, aunque lo fueran, tendrían que inclinarse hacia la opinión pública, porque serán castigados si la ignoran. Lo que hemos visto es que, aun si los gerentes del estado siguen las señales de los que ganan el juego de influencia, terminarán favoreciendo a los ricos de todas maneras. En otras palabras, aun si sus perspectivas son neutrales, aun si no tienen sesgos personales o están dispuestos a ignorar sus sesgos, el estado seguirá favoreciendo a los capitalistas por sobre los pobres, *porque la mayor riqueza de los capitalistas les da una ventaja enorme sobre cualquier otro grupo de presión*. Lejos de neutralizar los sesgos de clase de los políticos, el proceso político termina por reforzarlos.

La conexión estructural

Las dos fuentes del sesgo estatal que hemos examinado hasta ahora tienen lo siguiente en común: provienen del mayor alcance personal de los capitalistas sobre el estado. Son formas de *capturar el estado*. El estado termina siendo parcial porque los

capitalistas y sus sirvientes literalmente ocupan las salas del poder o ejercen influencia sobre quienes lo hacen. Sin duda, estos mecanismos son importantes. Revertirlos, o neutralizarlos, abriría un espacio importante para políticas más progresistas, y la experiencia nos enseña que en los casos donde han sido revertidos, las políticas públicas han tendido a inclinarse hacia los intereses de los pobres. Los casos más obvios son aquellos en que los trabajadores han sido capaces de formar sus propios partidos y elegir a candidatos de orígenes más populares, resultando en un giro en la orientación general del estado.

Los mejores ejemplos son los partidos de trabajadores o socialdemócratas en Europa y también en algunos países del Sur. En estos casos, no se trata solo de que los políticos han provenido de condiciones más modestas, sino del hecho de que las organizaciones han sido capaces de liberarse de depender del patrocinio de gente adinerada. Han sido capaces de recaudar sus propios fondos, e igualmente importante, como partidos de masas, han movilizado el único recurso que tienen en abundancia, el compromiso y la energía de sus miembros. Han formado además a sus propios expertos, por lo que dependen menos del asesoramiento de los *lobbistas*, y tienen experiencia directa en la vida de los trabajadores, por lo que tienen agendas políticas bien desarrolladas. Todas estas cualidades agregadas revierten notablemente la ventaja sistemática de los capitalistas en el proceso político.

Si bien la obstrucción de las distintas formas de capturar el estado contribuye en gran medida a corregir su sesgo hacia el capital, por sí sola no *revierte* el sesgo. Ello se debe a que el carácter de clase del estado no se basa fundamentalmente en el hecho de que los capitalistas tienen mayor y mejor acceso a

las autoridades políticas. Por poderosos que sean, se trata en realidad de mecanismos secundarios. Esto resulta evidente en el hecho de que incluso en países donde la captura del estado ha sido parcialmente neutralizada – como los países socialdemócratas en el continente europeo – la priorización básica de los intereses capitalistas no ha sido socavada. Las autoridades políticas aún respetan la integridad básica de la propiedad privada y la prioridad social del afán de lucro. Aquello se debe a que hay una fuerza más profunda, más potente que mantiene el estado atado a los intereses de la clase capitalista, incluso cuando se debilitan las otras fuentes de influencia. Y su eficacia parte del hecho que es la única restricción que no puede ser neutralizada o revertida en la medida que permanezcamos en un sistema capitalista.

La fuente fundamental del sesgo es que el estado depende estructuralmente de la inversión privada para su propia reproducción. Haga lo que haga, sean cuales sean las políticas que busque promover, debe primero garantizar las oportunidades de lucro de los capitalistas. Y un elemento central en la garantía de esas oportunidades involucra la responsabilidad de crear un ambiente político que los propietarios del capital perciban como ‘amistoso’ y favorable para sus necesidades y diseños. Esto obliga al estado a respetar los intereses capitalistas, independientemente de sus propias metas programáticas, sea cual sea su ideología política.

Consideremos lo anterior con más cuidado. En una economía capitalista, la producción de bienes y servicios está en manos de los dueños de los medios de producción, la clase capitalista. Esto es así por definición. Otra manera de expresarlo es que, en el capitalismo, los medios de producción no

están controlados por el estado, son de propiedad privada. Por lo tanto, hay una clara división entre las instituciones políticas y las económicas. Las transacciones económicas se llevan a cabo bajo la dirección de los capitalistas, mientras que los asuntos públicos como la legislación y hacer cumplir la ley son responsabilidad del estado. Los capitalistas confían en las instituciones públicas para proporcionar las condiciones generales que posibiliten sus actividades de lucro. El estado, por su parte, depende de la inversión de los capitalistas para generar nuevos ingresos y riqueza.

El hecho de que el estado no posee los medios de producción es de importancia vital. Como cualquier institución que perdura en el tiempo, necesita un flujo constante de ingresos para financiar sus operaciones. Tiene que pagarles a los funcionarios que emplea, financiar los programas que opera, comprar los materiales que utiliza en sus actividades diarias, etc. Todo esto se paga con el presupuesto del estado. Pero el presupuesto no crea sus propios fondos por arte de magia. Tienen que salir

**El acto mismo de crear una
clase de capitalistas
y una clase de trabajadores
difunde el mercado
a través de la sociedad.**

de algún lugar y, puesto que el estado no es dueño de su propio patrimonio productivo, tienen que ser adquiridos de otras fuentes. La principal de esas fuentes son los impuestos. Los ingresos estatales provienen principalmente de los impuestos que se cobran al pueblo en general. Estos impuestos son o gravados directamente de los ingresos personales o corporativos, o tributos indirectos de varios tipos: impuestos de venta, impuestos al consumo, impuestos al valor agregado, etc. Cualquiera que sea su forma, estos impuestos constituyen la principal fuente de ingresos para el estado moderno. Es lo que permite que siga funcionando.

Los impuestos son una reclamación que el gobierno hace sobre el *ingreso*. Es decir que si los administradores de estado desean mantener un flujo constante de ingresos, requiere que los ingresos que están reclamando también crezcan constantemente. Pero sabemos, por supuesto, que los ingresos en una economía capitalista dependen de las decisiones de inversión de los capitalistas. Si los empleadores capitalistas inauguran nuevas instalaciones o simplemente amplían sus operaciones actuales, esto resulta en nuevos puestos de trabajo y más dinero para los trabajadores. Como esas nuevas inversiones generan la venta de nuevos bienes y servicios, las ganancias capitalistas crecen y por ende, sus ingresos personales también crecen. Así que el crecimiento de los ingresos del capital y de los trabajadores depende de una previa expansión de la inversión. Y eso significa, a su vez, que la pujante recaudación tributaria para el estado depende de una economía en expansión, que a su vez se basa en la expansión de la inversión hecha por los capitalistas.

Esto nos trae al punto clave. Si pudiéramos programar a los capitalistas para que mantengan su actividad de inversión

sin importar las decisiones de los políticos, el estado podría entonces pasar todas sus políticas sin mayor preocupación. Seguirían entrando los ingresos y los programas preferidos de los políticos estarían plenamente financiados. El problema, por supuesto, es que los capitalistas no están sometidos a tal compulsión a invertir. Si así lo deciden, pueden disminuir el ritmo de expansión. Podrían decidir no invertir del todo y hasta pueden trasladar su dinero al extranjero y colocarlo en instrumentos financieros. Lo que hacen con sus ganancias es enteramente su propia decisión.

Para los administradores del estado, esto crea un enorme problema. Si los inversores deciden disminuir el ritmo de inversión, entonces significa que de pronto el presupuesto comienza a agotarse, las políticas públicas se vuelven inciertas, los programas sociales pierden su financiación, etc. Pero igualmente importante: a medida que se desacelera el crecimiento económico, el crecimiento del empleo también se vuelve anémico. El desempleo comienza a aumentar, se profundizan los niveles de pobreza y la calidad de vida comienza a deteriorarse. En un marco democrático, todo esto significa que el partido político o el Presidente que está al mando del declive en las fortunas económicas tiene que pagar el precio. Por lo general, son rechazados en las próximas elecciones, ya que el público los considera responsable por el deterioro de sus condiciones. De modo que cualquier desaceleración en la actividad económica castiga a los responsables políticos de dos maneras: los priva de los recursos necesarios para llevar a cabo su agenda política y socava su popularidad electoral.

El resultado de esto es que los gerentes del estado típicamente tienen mucho cuidado de evitar todo lo que pudiera

contrariar a los capitalistas. Esta reticencia es un índice del hecho que, en un sistema capitalista, el estado depende estructuralmente del capital como parte de su esencia misma. Más allá de las especificidades locales o políticas, esta dependencia está integrada a la arquitectura fundamental de un estado en una sociedad capitalista. Resulta independientemente de lo bien que los capitalistas se organicen como grupo de presión o de lo densamente que ellos mismos ocupen los pasillos del poder. Es por esto que incluso cuando fallan los otros dos cauces de la influencia capitalista, el estado sigue siendo un órgano de clase, una institución que tiene que respetar y dar prioridad a los intereses del capital.

De hecho, la importancia de la dependencia estructural es que amplifica y fortalece el poder de los otros dos medios de influencia. Los responsables políticos entienden que su éxito en el poder depende fundamentalmente de la salud de la economía, si la gente está perdiendo su empleo, típicamente votarán para derrocar al partido gobernante. Siendo el caso, las elites políticas hacen todo lo posible por alentar que los inversionistas confíen en ellos y en su sensibilidad a sus prioridades. Por ende, en la mayoría de los gabinetes, los puestos económicos claves se conceden a los representantes mejor conocidos y de mayor confianza de la comunidad empresarial. El ministerio de finanzas o tesorería típicamente es encabezado por un banquero; el ministerio de comercio es dirigido por un destacado empresario y así sucesivamente. En materia de legislación económica, los administradores del estado no esperan a que se les acerquen los *lobbyistas* con sus consejos. Muy a menudo son ellos los que contactan a representantes industriales y activamente solicitan

sus opiniones, para así asegurarse de que las nuevas leyes son aceptables para el mundo empresarial.

En otras palabras, como los administradores del estado son conscientes de que su seguridad depende de la confianza de los inversores, por lo general tratan de generar esa confianza *invitando* a capitalistas a los pasillos del poder, otorgándoles el acceso por el cual otros grupos tienen que luchar con uña y diente. Su dependencia estructural en el capital induce al estado a *crear* redes interpersonales con individuos de esa clase. Así que aun cuando las instituciones políticas se configuran para neutralizar todas las ventajas que tienen capitalistas en el juego de la influencia, el estado tiene buenas razones para ir en busca de esa influencia, debido a la posición privilegiada de los capitalistas en el sistema en su conjunto.

El verdadero poder está en la economía

La discusión anterior tiene una implicación muy importante. Sugiere que, en el capitalismo, el poder real no reside en el estado, sino en la economía. A su vez, esto significa que *ocupar cargos gubernamentales no es lo mismo que poseer el poder verdadero*. Se podría decir que hay una gran diferencia *ocupar cargos públicos y tener poder*. Una y otra vez, hemos visto a partidos de izquierda hacer grandiosas promesas, salir elegidos y dentro de poco tiempo traicionar a sus votantes. Después de haber prometido ambiciosos programas de reforma social, terminan cumpliendo muy poco, o peor aún, imponen medidas de austeridad económica aún más duras que las de los partidos conservadores. Esto ocurre porque los gobiernos, aun los más radicales, pueden ser sometidos por el capital sin disparar un solo tiro. Lo único que tiene que hacer es reducir el ritmo de la

actividad económica, frenar el ritmo de la inversión, para que los líderes políticos no tengan más remedio que cambiar sus prioridades de modo que al aplacar a los inversores terminan dejando las demás prioridades fuera de la discusión.

El poder verdadero para efectuar cambio social dentro del capitalismo conlleva mucho más que votar al partido correcto. Requiere encontrar una manera de contrarrestar el poder económico de los capitalistas. Cómo lograrlo es el enfoque de la siguiente sección.

¿Cómo surgen las reformas?

Lo que el análisis anterior nos muestra es que no se equivoca la percepción popular sobre el gobierno, que el estado es capturado por los ricos, y *sí*, fundamentalmente promueve sus intereses. Más aún, no los favorece debido a aberraciones como la corrupción o la debilidad moral de los políticos. El sesgo hacia los capitalistas es parte integral del sistema: en primer lugar, debido a los inmensamente mayores recursos que pueden movilizar los capitalistas para ejercer influencia sobre los políticos, pero más importante aún, debido a la dependencia estructural del estado sobre el capital. Esto significa que, si lo dejamos a su propia suerte, no se puede confiar que el estado sirva de contrapeso al poder de la clase capitalista. No intervendrá para reforzar la capacidad de clase trabajadora de negociar un arreglo más beneficioso, para proteger a los trabajadores del poder de empleadores o para ayudar a la gente trabajadora a adquirir sus necesidades básicas. En efecto, la tendencia más básica del estado será *proteger* los privilegios adquiridos por los ricos, no diluirlos.

Esto plantea una pregunta importante. ¿Si los administradores del estado típicamente no promulgan políticas progresistas por cuenta propia, entonces cómo surge la legislación progresista? A fin de cuentas, todos los países capitalistas avanzados y muchos del Sur, tienen un estado de bienestar. Y sean cuales sean sus otros resultados, los estados de bienestar atenúan el impacto de las fuerzas del mercado, a veces redistribuyendo ingresos hacia la clase obrera y, en otras ocasiones, proveyéndole servicios básicos sin costo inmediato. Se trata claramente de políticas que la gente trabajadora ha exigido, y más importante aún, a las que se han opuesto los capitalistas. ¿Cómo podrían haberse promulgado si el estado siempre y en todas partes sigue las señales del capital? ¿Qué hizo que fueran posibles?

Comencemos por señalar que el análisis anterior no implica que el estado nunca aprobará reformas progresistas, sino que no lo hará *por su propia cuenta*. Lo que hemos descrito hasta ahora es una serie de mecanismos que disponen al estado a darle prioridad a los intereses del capital sobre aquellos de los trabajadores. Este es el estado normal, el statu quo, en el capitalismo. Los mecanismos que hemos descrito ejercen una *fuerza gravitacional* sobre el estado, poniéndolo en órbita alrededor de los intereses de la clase capitalista. Pero al igual que con la gravedad, es posible construir mecanismos que logren, dentro de ciertos límites, aflojar el dominio que ejerce el capital sobre la política de estado. Requiere la creación de contrapesos que otorguen al estado grados de independencia del capital, para que pueda promulgar políticas más favorables para la gente trabajadora.

La más importante de estas fuentes es la presión de una clase obrera organizada. Históricamente, han sido los momentos en que los trabajadores han montado amenazas de graves perturbaciones económicas que los estados se han orientado hacia una dirección más progresista.

Cómo la lucha de clases contrarresta el sesgo del estado Recordemos que lo que restringe más profunda y potentemente al estado es el hecho que depende estructuralmente del capital. Este hecho básico asegura que las prioridades del estado se vean obligadas a alinearse con las prioridades de la capital. Se deduce así que, si las prioridades del capital cambiaran y estuvieran dispuestas a acomodar los intereses de los trabajadores, entonces esto abriría un espacio para reformas progresistas. Por esta razón es importante el movimiento obrero. Si los capitalistas tienen poder político porque controlan el flujo de inversión, son los trabajadores los que generan en primera instancia las ganancias que se invierten. Un movimiento obrero movilizado puede obligar a los empleadores a tomar una decisión, permitir políticas sociales más progresistas o enfrentar la perspectiva de la continua interrupción de la producción y por lo tanto de las ganancias.

En situaciones donde los trabajadores logran imponer costos verdaderos a los empleadores por medio de huelgas, desaceleración del trabajo u otras formas de interrupciones, debilita considerablemente las limitaciones normales sobre el estado. El cambio ahora puede provenir de dos direcciones diferentes. En primer lugar, los responsables políticos que simpatizan con los trabajadores pueden aprovechar la interrupción económica para apelar a sus patrocinadores capitalistas. Puede

argumentar que los empleadores, que hasta entonces han bloqueado las reformas progresistas, deben modificar su postura porque hacerlo *le conviene a sus intereses*. Políticos que normalmente son demasiado tímidos para luchar por los trabajadores ahora pueden apelar a los propios intereses de los empleadores para sugerir que la única opción que tienen los empleadores para reanudar el flujo de ganancias es atender a las demandas de los trabajadores. Por otra parte, la iniciativa también puede surgir de los mismos capitalistas. En situaciones de intensa actividad de huelga e interrupciones de trabajo, ha habido ocasiones en las que segmentos de la clase capitalista se han dado cuenta que la única manera de restablecer la estabilidad es ceder a algunas demandas de los trabajadores. En estos casos, los trabajadores crean una división dentro de la clase, atrayendo a segmentos de la clase a la coalición progresista y convirtiéndolos en parte del movimiento pro-reforma.

Así, las reformas se hacen posibles porque los empleadores se ven *obligados* a concederlas. Y se ven obligados a hacerlo porque la perturbación económica hace que sea demasiado costoso seguir bloqueando las reformas. Y la interrupción, por último, sólo es posible si el agente social que crea el flujo de ingresos para los empleadores decide que ya no está dispuesto a hacerlo. Es por esta razón que los radicales siempre han insistido en la centralidad de la lucha de clases para lograr reformas progresistas. Ningún otro agente social tiene la capacidad para contrarrestar efectivamente el poder estructural del capital, porque el capital no *depende* de ningún otro actor social de forma tan dramática.

¿Pero significa esto que cada vez que busquemos alguna medida positiva del estado, hace falta una movilización obrera

nacional? ¡Es de esperar que no, porque no va a suceder! La gente no va a unirse a oleadas de huelga o volcarse a la calle semanal o mensualmente, año tras año, para presionar al estado. ¿Cómo por tanto pueden los trabajadores mantener cierta presión sobre el estado, si no están preparados para desatar perturbaciones económicas ante la primera señal de resistencia de la élite?

La manera más eficaz es establecer una presencia dentro del sistema político y del estado a través de un partido político que lucha por sus intereses, algún tipo de partido de los trabajadores. La presencia de tal partido político, que se basa en la clase obrera y que compite en elecciones, crea un defensor permanente de los intereses de los trabajadores. Su presencia asegura que la clase trabajadora no tenga que ejercer su fuerza económica cada vez que surge un debate sobre políticas públicas. Más bien, su poder es institucionalizado dentro del estado y pasa a formar parte del proceso normal de negociaciones entre los administradores del estado. Podríamos decir incluso que tener un partido dedicado en el parlamento genera *un efecto multiplicador* en cuanto al poder que la clase obrera puede ser capaz de desarrollar en el lugar de trabajo. Los partidos pueden aprovechar al máximo la influencia que surja de cada instancia de movilización o de actividad de huelga. Así, hay una fuerza dentro del estado que se compromete a avanzar hasta donde pueda los intereses de los trabajadores.

Aquí hay que advertir algo importante. La existencia de un partido de los trabajadores releva a la clase obrera de tener que salir a la calle cada vez que surge un debate sobre políticas públicas. El partido lucha por ello en su lugar. Pero, si bien el partido tal vez no requiera perturbaciones económicas *efectivas*

cada vez que negocie un asunto político, sí necesita que exista una *amenaza* efectiva de tal perturbación. Un partido en el poder, o en la legislatura, sólo puede negociar eficazmente a favor de los trabajadores si está respaldado por un movimiento organizado, capaz, si fuera necesario, de paralizar la producción. Es la contraparte de la amenaza que ejerce el capital a través de su capacidad de suspender la inversión si el estado toma medidas que perjudiquen sus intereses. Representantes del partido de los trabajadores tienen que ser capaces de señalar un poder similar de su lado. Por lo que tener un partido nunca puede reemplazar la construcción de un movimiento obrero organizado y militante. De hecho, su poder político depende de contar con tal movimiento que lo respalde.

Una advertencia: los límites a las reformas

¿Hasta dónde pueden llegar la organización y presión de clase para democratizar el estado? ¿Puede neutralizar completamente el poder del capital? Aunque hemos visto un enorme progreso en los países con los más altos niveles de organización en sus clases obreras, hay verdaderos límites a la democracia en un sistema capitalista. Recordemos que como la inversión permanece en manos privadas, el estado simplemente tiene que darles prioridad a los intereses capitalistas. Y el capitalismo se define por el control privado sobre la inversión. Aun los partidos socialistas más radicales, aun los movimientos sindicales más poderosos, tienen que doblegarse a ello. Siempre que los partidos gobernantes opten por respetar los derechos y prerrogativas de los dueños de los medios de producción – capitalistas, banqueros, empresarios agroindustriales, financistas – se ven obligados a respetar además su poder privado y social. Y aun

cuando la clase trabajadora logra socavar este poder a través de la profundización la democracia política y económica, el hecho es que no puede nivelar la influencia entre la gente común y corriente y los ricos, porque respetar la propiedad privada significa también respetar la voz preponderante de los ricos sobre las decisiones económicas.

Esto es lo que significa, al fin y al cabo, decir que, en el capitalismo, el poder real no reside en el estado, sino en la economía. Podemos democratizar el estado y a través de él debilitar considerablemente el poder arbitrario que los capitalistas ejercen sobre las decisiones económicas que afectan la vida de todos: inversión, empleo, salarios, jornada laboral, etc. Y también podemos aflojar su control sobre la política. Pero mientras estemos en un sistema capitalista, el estado tendrá que respetar el poder estructural del capital. Y mientras haga aquello, habrá un límite a la democratización. Para que la democracia

El capitalismo le impone un nivel básico de inseguridad a los trabajadores, todo el tiempo, en todas partes, independientemente del país o región.

real sea posible tendríamos que ampliar esas decisiones a un bastante mayor grado de debate social y toma de decisiones. Pero el nivel de control social sobre la economía que se necesita para alcanzar la democracia real no es posible bajo el capitalismo. La implicación es clara: mientras que un movimiento obrero movilizado y organizado puede democratizar substancialmente la vida social y exigir concesiones del estado, el capitalismo impone graves límites al grado de nivelación del poder político entre los ricos y los pobres. Facilitar verdaderamente la plena participación en las decisiones que nos afectan a todos requiere trascender el capitalismo.

Las raíces del declive

Lo que la sección precedente estableció es que los partidos políticos de izquierda necesitan tener un movimiento obrero organizado y movilizado para proporcionarles una palanca de influencia ante el estado. Hay que examinar lo que sucede si no existe esta asociación entre los dos. El asunto es importante porque explica por qué los partidos que proclaman un compromiso socialista han, en los últimos años, no sólo abandonado sus programas radicales, sino que se han ido al otro extremo, de imponerles duras medidas de austeridad a sus propios partidarios.

No debería sorprender que si los partidos socialistas o izquierdistas llegan al poder sin el poder de clase organizado, o con un poder de clase menguante, tienen que moderar sus metas *a lo que el equilibrio de poder les permite alcanzar*. Esto se debe a que cuando tratan de aprobar sus políticas en el parlamento o el congreso, sus oponentes políticos no tienen muchos motivos para aceptarlo. En estas situaciones, los partidos conservadores

entienden que la izquierda no tiene las “tropas en terreno” que les den influencia política, y esto debilita la mano de los partidos de izquierda en las negociaciones políticas. Los elementos más conservadores dentro del propio partido pueden ahora argumentar a favor de reducir los objetivos radicales, en nombre del “realismo”, y tendrían razón, ya que las agendas políticas que eran realistas cuando contaban con el respaldo del poder verdadero de la clase obrera ahora estarán, de hecho, fuera de alcance. Los partidos de izquierda en esta situación sienten que la presión proveniente de los empresarios es ahora mucho más amenazante porque los empresarios en sí tienen menos que temer de un contra-oleada de la clase obrera organizada. Gradualmente, estos partidos tienen que ajustar sus agendas para alinearlas más cercanamente a las preferencias de los empresarios, el equilibrio de poder así lo exige.

Hay dos rutas distintas a este desvío hacia la derecha de los partidos obreros. Una ocurre cuando, debido a cambios económicos o ataques políticos, su base en la clase obrera es mermada. Un ejemplo sería si, debido a la desindustrialización, los partidos cuyo respaldo de clase provenía de los trabajadores del sector manufacturero encontrarán que sus sindicalistas más ardientes y militantes se quedaron cesantes o fueron trasladados a sectores que no están organizados. En este caso, un partido de trabajadores podría ser muy ambicioso, pero se daría cuenta que ha perdido gran parte de la fuerza que le habría permitido luchar por las reformas. Pero la pérdida de una base en la clase obrera también puede resultar de la lucha de clases “a la antigua”, como en los Estados Unidos durante la década de los 1980, cuando la afiliación sindical se desplomó en cuestión de unos pocos años bajo ataques políticos de los

empleadores. Los resultados políticos eran predecibles. El ala conservadora del partido, bajo la dirección de Bill Clinton y otros, orientó su agenda en una dirección claramente pro-empresaria, y fue capaz de silenciar a sus críticos más progresistas, principalmente bajo la bandera del realismo político.

La segunda ruta ha sido la de muchas socialdemocracias europeas, donde las transformaciones económicas también desempeñaron un papel. Pero en este caso, su efecto fue amplificado por un creciente conservadurismo entre su liderazgo político, tanto de los partidos y de los sindicatos. El establecimiento de estados de bienestar en estos países se dio gracias a la presión de movimientos obreros muy militantes y muy movilizadas durante los años 1930 y 1940. Pero ya en los primeros años después de la segunda guerra mundial, los sindicatos en Europa empezaron a ser encabezados por líderes más conservadores, más preocupados por el mantenimiento de la paz industrial después de años de guerra sangrienta y dificultades económicas. Este conservadurismo de los sindicatos fue reforzado por sus aliados de partido dentro del estado, que ya no sólo respondían a los líderes sindicales, sino que también estaban bajo la presión de los capitalistas para restaurar las bases para el crecimiento económico. El resultado fue que las federaciones sindicales más grandes y los principales partidos políticos de la izquierda adoptaron un programa de cooperación cautelosa con los empleadores lo largo de los años 1950 y los 1960.

Mientras que esta postura fue rechazada por la clase obrera europea durante un breve lapso al final de la década del 1960, el programa conservador volvió a imponerse para la época de Reagan y Thatcher. Para la década del 1980, los partidos obreros en gran medida habían perdido u olvidado la tradición

del sindicalismo militante. Mientras tanto, la capacidad de resistencia de los sindicatos fue erosionada rápidamente, a medida que las secciones sindicalizadas de la clase obrera decrecían rápidamente. No en vano, estos partidos se reorientaron rápidamente hacia la derecha, por lo que, para los años 2000, aunque mantenían una base en la clase trabajadora, su agenda política se había acercado mucho al programa de los partidos tradicionales del centro.

Podemos observar, entonces, los cuatro posibles escenarios bajo el capitalismo en relación con el estado.

El Cuadro No. 2, en el lado izquierdo superior describe una situación sin un movimiento obrero y sin un partido obrero. Esta es la peor combinación para conseguir reformas progresistas, ya que no existe ninguna de las dos condiciones que permiten presionar al estado. Es de esperar que los países que pertenecen a este cuadro sean los que tengan la agenda política más conservadora, y los gobiernos menos receptivos a las demandas de los pobres. En el mundo industrial avanzado, este cuadro describe a los Estados Unidos.

El Cuadro No. 2 describe una situación en la que hay un movimiento obrero presionando al estado desde afuera, pero sin ayuda de un partido dentro del estado. El caso histórico que reúne estas condiciones sería de nuevo los Estados Unidos, pero a finales de los años 1930, cuando un movimiento obrero masivo y organizado irrumpió en la escena y obligó que el partido demócrata aprobara reformas de bienestar social. Notemos que, si bien esta explosión obrera empujó al estado en una dirección más progresista, el impulso fue más débil de lo que pudo haber sido si un partido obrero hubiese estado en una posición para aprovechar la relación de fuerzas de clase en la

Cuadro No. 2

		Movimiento Obrero	
		No	Sí
Partido Obrero	No	1 EEUU hoy	2 EEUU en los 30s
	Sí	3 Europa en los 90s	4 Europa en los 30s

sociedad. Mientras que un partido obrero le hubiera aprovechado al máximo la influencia del poder de la clase obrera organizada, el partido demócrata tuvo que ser arrastrado en una dirección más radical contra su voluntad, y solamente hizo lo mínimo necesario. De hecho, el ala sureña del partido en el Congreso actuó asiduamente para socavar las demandas que provenían de la clase trabajadora y fue bastante exitoso en este esfuerzo. Y para el año 1947, cuando el ala más radical del movimiento obrero había sido sometida, el Congreso fue capaz de lanzar el primer y más significativo paquete de políticas que buscaba revertir el programa del 'New Deal'. Se trataba de la Ley Taft-Hartley, que le quitó a la clase trabajadora muchas de las protecciones legales que la anterior Ley Wagner había sido capaz de proporcionar. Este rápido deterioro de influencia fue un resultado directo del hecho de que los Demócratas nunca se transformaron en un partido obrero. Siguieron siendo un partido de los empresarios, que le dio cierta cabida a la clase trabajadora, pero siempre en

un puesto subordinado. Apenas la amenaza inmediata de la agitación disminuyó después del 1938, las autoridades políticas, respaldadas por la clase empresaria, empezaron a socavar los avances ganados durante los años 1930.

Las desventajas de la situación plasmada en el Cuadro No. 2 se hacen más claras cuando lo comparamos con el Cuadro No. 4, donde hay tanto un movimiento obrero y un partido obrero. Esta situación corresponde al equilibrio político en Europa en los años 1930 y 1940, cuando se creó un modelo de socialdemocracia que era mucho más ambicioso que el 'New Deal' de Roosevelt. A partir de los años justo después de la Gran Depresión, y extendiéndose al período después de la segunda guerra mundial, los movimientos obreros europeos se hicieron más fuertes, pero además contaron con sus propios partidos que ganaron elecciones y ocuparon cargos políticos. A diferencia de los Demócratas en Estados Unidos, que hicieron lo mínimo necesario, los partidos de izquierda europeos —partidos obreros, socialistas y comunistas— maximizaron el poder que el movimiento de la clase obrera pudo generar. El resultado fue que en Europa occidental se pudo construir estados de bienestar que eran más profundos, más generosos y más duraderos que el estadounidense.

La situación en el Cuadro No. 3 capta el panorama político en Europa a partir de los años ochenta. Para entonces, el movimiento obrero organizado estaba en retirada en gran parte del continente, la densidad sindical estaba en declive y los sindicatos establecidos adoptaban una postura muy limitada y defensiva. Su potencial disruptivo se había debilitado gravemente, lo que significó que los partidos de izquierda con los que estaban asociados sentían muy poca presión de la clase obrera. *Toda la*

presión ahora provenía del capital. No es de extrañar entonces que se haya iniciado el lento desmantelamiento del estado de bienestar europeo. Comenzó de a poco, porque a pesar de que los sindicatos se estaban debilitando, seguían teniendo cierta fuerza. Además, aun cuando los partidos de izquierda se estaban volviendo más conservadores, preservaban una fuerte tradición socialdemócrata. Pero para principios de los años 2000, el giro ya era muy evidente y se daba a una velocidad cada vez mayor. Para entonces, no se trababa de partidos de izquierda que carecían de una base de poder para defender el estado benefactor; su cultura interna se había girado considerablemente hacia el *ethos* de los partidos dominantes.

El desafío para la izquierda actual es tramar un cambio hacia el Cuadro No. 4. En los Estados Unidos, al parecer es pedir demasiado. Los movimientos obreros europeos cuentan al menos con semblanzas de partidos de izquierda que al menos pueden pensar en reformar, como en el caso del Partido Laborista en Gran Bretaña. Jeremy Corbyn y sus seguidores pueden concebir no sólo apoderarse del partido, sino también revitalizar los vínculos con los sindicatos y dinamizar las secciones militantes de la clase obrera. Y por otra parte, los sindicalistas radicales pueden al menos contemplar cómo trabajar con un partido obrero reformado para impulsar una agenda política progresista. Pero en los Estados Unidos, en el corto plazo, la perspectiva más probable es pasar del Cuadro No. 1 al Cuadro No. 2. No es imposible que se pueda dar el salto directo al Cuadro No. 4, que se pudiera generar el primer verdadero partido socialista u obrero de masas, como un componente o un vástago de un movimiento obrero revitalizado. Sería, por supuesto, el panorama más deseable. Pero las condiciones para que suceda son más remotas.

Conclusión

El estado bajo el capitalismo no es y *no puede ser* políticamente neutral. No puede encarnar la famosa imagen de la Señora Justicia, que pesa las demandas de diversos sectores en una escala moral precisamente calibrada, libre de todo sesgo. Por el contrario, su propia estructura asegura que el estado siempre tendrá un fuerte sesgo favorable a los poseedores de riqueza y capital. Este sesgo, que forma parte de la misma estructura del estado, conlleva una implicación política muy importante. A menos que exista un contrapeso, el gobierno en un país capitalista tenderá a reforzar las desigualdades existentes, en vez de tratar de reducirlas; protegerá el poder y el privilegio, en lugar de intentar neutralizarlos; y pondrá obstáculos en el camino de las reformas sociales, en lugar de abrirles camino.

Lo anterior significa que para que el poder del Estado sea aprovechado para fines progresistas, se requerirá una fuerza de contrapeso al poder del capital. La más importante de tales fuerzas es la clase obrera, debido a su ubicación en el meollo del sistema. ¿Pero significa esto, podríamos preguntarnos, que, a falta de un movimiento obrero movilizado, nada puede mover el estado en una dirección más progresista? ¿Qué se puede esperar de otras formas de presión, como movimientos de masas de gran tamaño, pero en los que la clase trabajadora no juega un papel protagónico? Es una pregunta importante porque en el pasado reciente hemos visto movilizaciones bastante significativas en torno a campañas electorales, el fenómeno de Bernie Sanders en los Estados Unidos, pero también Jeremy Corbyn en Gran Bretaña. Estos generaron enorme entusiasmo y desataron una gran cantidad de energía, que no se limitó sólo a la limitada arena electoral.

La respuesta es que estas movilizaciones sí tienen de hecho mucho potencial en dos sentidos. En primer lugar, a pesar de que no se basan en la clase obrera, las elites políticas tienen que tomarlas en cuenta, porque son capaces de imponer costos. Puede sacudir la complacencia de las autoridades políticas, que ahora tienen que lidiar con retos electorales que antes no los preocupaban tanto. Legisladores que normalmente ignoraban a sus votantes ahora tienen que considerar la posibilidad de que podrían perder sus puestos. Y políticos rebeldes que normalmente no tienen posibilidad alguna de ganar elecciones de repente encuentran que aumenta su viabilidad si logran aprovechar los cambios de ánimo. Por tanto, estas movilizaciones electorales son ciertamente importantes, porque comparten una característica con los movimientos activados, imponen algún nivel de costos sobre las élites que se niegan a escuchar.

Es por esto que la promesa
convencional — que
si trabajas duro y sigues
las reglas llegarás a la cima —
es una llana mentira.
Las reglas son las que crean
la miseria.

Pero por supuesto, el grado del impacto que logran tener es un asunto distinto. Al final del día, las movilizaciones de este tipo – si no se vinculan al movimiento obrero – se enfrentan a límites severos. Se enfocan en elegir a mejores candidatos, lo que es importante, pero las personas que logran elegir sencillamente se meten en las mismas limitaciones institucionales que atraparon a sus predecesores. Los nuevamente elegidos ahora tienen que lidiar con la presión y el poder de la gente adinerada. Y precisamente debido a que las campañas de masas no perturban realmente la economía, no se toca realmente la influencia y el poder capitalista. Siguen presionando a los legisladores, tal vez con un poco más de cautela, pero con la suficiente fuerza como para limitar gravemente las posibilidades de reforma. Por lo que la capacidad de estas movilizaciones masivas para impulsar políticas públicas se limita a aquellas áreas donde no habrá mucha oposición capitalista, descartando así muchos de los asuntos realmente importantes.

De todos modos, no es una razón para denigrar las movilizaciones electorales. Y esto nos trae a su segundo gran potencial. En una época como la nuestra, en la que el movimiento obrero está tan débil y desmoralizado, una movilización electoral radical y altamente enérgica puede tener el efecto de catalizar al mismo movimiento obrero. Al motivar a que tanta gente participe políticamente, al energizar a la población en torno a temas progresistas, pueden ayudar a invertir el sentido de aislamiento y desmoralización que caracteriza a la clase obrera. Los sindicatos pueden sentir que el público está de pie junto a ellos, exigiendo el mismo tipo de demandas por las que siempre han luchado los sindicatos progresistas, y en esta cultura política diferente, los patrones podrían estar más dispuestos a negociar, o por lo

menos, menos propensos a la intransigencia. Este vale especialmente en el sector de servicios, donde los empleadores tradicionalmente han presentado a los sindicatos ante la opinión pública como intereses especiales muy estrechos, que solo se cuidan a sí mismo a costa de los demás; hay que solo pensar en los maestros, en los trabajadores del transporte público, a los empleados del correo, etc. Pero cuando el mismo público empieza a exigir más financiamiento para las escuelas, para trenes mejores, etc. la tarea de desafiar al empleador se hace menos intimidante para los sindicatos.

Por lo tanto, a pesar de que el camino a reformas progresistas pasa por la clase obrera, no tiene que iniciarse allí. Las energías que se requiere para organizar a la clase obrera pueden adquirirse en otros movimientos y otras fuentes. El punto principal es que estos movimientos tienen que ser amplios, ambicioso e incluyentes y deben cuestionar la distribución básica del poder y de los recursos. Tienen que ser audaces y enfocarse en los centros de poder. Esto es lo que muchas de las recientes explosiones en el mundo tienen en común: Occupy Wall Street, la primavera árabe, la campaña de Bernie Sanders, la movilización a favor de Corbyn, por nombrar los casos más conocidos. Ninguna se basó en la clase obrera. Sin embargo, todas contribuyeron a cambiar la cultura política, levantando el ánimo y las ambiciones políticas, y todas de alguna manera dinamizaron a partes del movimiento obrero. Han contribuido a desarrollar una sensación por todo el mundo, que tal vez la larga y oscura noche del neoliberalismo podría estar llegando a su fin. Y tal vez lo esté. Pero hasta dónde seamos capaces de presionar dependerá, al final, en cuanto poder podamos reunir contra el estado y contra la clase de inversionistas que lo respalda.



EN ESTA SERIE

Entendiendo al capitalismo El capitalismo y el estado El capitalismo y la lucha de clases

PUBLICADO POR

Jacobin Foundation, 388 Atlantic Avenue,
Brooklyn, NY 11217

jacobinmaglat.com